



EL CASO MORETT PRUEBA LA NECESIDAD DE ANULAR EL VOTO

- ✓ **No vivimos una democracia, sino una partidocracia mafiosa; solamente así los pillos se pueden volver diputados.**
- ✓ **Debe ponerse fin a la dictadura de las oligarquías partidistas; el poder debe estar en manos de los ciudadanos**
- ✓ **El Secretario de Gobernación en conflicto de intereses: o defiende a la Morett o combate al terrorismo.**

Si Lucía Morett Álvarez, una presunta militante de las terroristas Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) y prófuga de la justicia de Ecuador se convertirá en diputada federal, esto sólo es posible porque México padece un sistema político enfermo y degenerado.

Si Lucía Morett será diputada no es porque vaya a ser electa por los ciudadanos, sino porque en la “democracia” espuria que vivimos se permite que un pillo, como es Alberto Anaya (asociado con otro pillo llamado Carlos Salinas de Gortari) imponga como representante popular a quien se le pegue la gana, porque él es dueño de una franquicia llamada Partido del Trabajo, carente de representatividad y que ha vivido de prestado.

Hoy Lucía Morett se convertirá en diputada, ¿mañana quien?, ¿Tiburcio Cruz Sánchez el patriarca del EPR?, ¿Daniel Arizmendi?, ¿El Chapo Guzmán?

¿Ve alguien a Morett haciendo campaña para ganarse el voto de los ciudadanos a los que supuestamente va a representar?, ¿la vemos exponiendo sus propuestas o tratando de convencer a los votantes sobre las cualidades de su persona? ¡No hay necesidad!

En una democracia los representantes de la sociedad son electos por los ciudadanos, tras una intensa competencia entre candidatos. Pero en México dos quintas partes de los diputados a federales son impuestos a dedo por los oligarcas dueños de los partidos políticos y, por tanto, los primeros no son más que mandaderos de los segundos.

Pero las otras tres quintas partes de los diputados federales no andan mejor: también son mandaderos de los oligarcas partidistas, pues a ellos deben sus candidaturas y por ende sus cargos. Por cuanto que en México no hay reelección inmediata de los legisladores, éstos no tratan de preservar sus cargos cumpliéndole a los electores, sino siendo serviles con los amos de sus partidos.

Por eso el país está tan mal, por eso padecemos una crisis de inseguridad tan grave, porque en lugar de una democracia tenemos una farsa. Los políticos, al mal gobernar el país, no temen el voto de castigo, porque a final de cuentas los votantes no decidimos, sino un puñado de oligarcas dueños de los partidos políticos.

Y por si esto no fuera suficiente, con la reforma electoral de 2007, los políticos decidieron expulsar definitivamente a los ciudadanos de la política, privándonos de incluso el derecho al pataleo, al anular el derecho a la libre expresión en asuntos políticos en radio y televisión y al proscribir las candidaturas independientes.

De ahí que sea tan atinada la iniciativa ciudadana para protestar contra la partidocracia, mediante la anulación del voto.

Pero el voto nulo no debe ser un voto en blanco. Los ciudadanos podemos escribir en las boletas nuestro repudio a la partidocracia, nuestra exigencia de seguridad, ahora! y nuestra demanda de democracia verdadera: fin a los diputados de representación proporcional, reelección de los diputados, derecho a candidaturas independientes, fin al financiamiento público a los partidos políticos, libertad de expresión sobre asuntos políticos en radio y televisión.

Además, la anulación del voto no debe ser sino parte de un amplio movimiento de resistencia civil que haga evidente la grave crisis de legitimidad del sistema político mexicano, desemboque en el derrocamiento de la partidocracia e implante la democracia verdadera en México.

Finalmente, cabe regresar al tema de Lucía Morett con nuevos datos acerca de la confabulación de intereses para lograr su impunidad. Ya denunciarnos que su designación como candidata a diputada federal fue decidida por Alberto Anaya pero a petición de Carlos Salinas. También denunciarnos que el abogado Mariano Albor, ligado al ex presidente, asesora jurídicamente a Rogelio Ortega Martínez, funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero, implicado en secuestros y asociado de las FARC.

Ahora queremos denunciar que otros abogados, ligados a Carlos Salinas, han emprendido gestiones para impedir que Morett sea extraditada a Ecuador. Estos abogados pertenecen ni más ni menos que al bufete Zinser Esponda y Gómez Mont Abogados, del cual ha sido socio Fernando Gómez Mont, el actual Secretario de Gobernación.

Ante el evidente conflicto de intereses, el Secretario de Gobernación tendrá que elegir entre cumplir con sus obligaciones en materia de política interna (entre ellas el combate al terrorismo) o defender a la prófuga de la justicia de Ecuador y presunta militante de las FARC, Lucía Morett.

Atentamente

José Antonio Ortega Sánchez
Presidente